



NUE 205-A-2020 (CE)

xxxxxxx xxxx contra Universidad de El Salvador -UES-

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas con cinco minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.

Descripción del caso:

I. El presente procedimiento de apelación fue promovido por xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx en contra de la resolución emitida por la oficial de información de la **Universidad de El Salvador –UES–**, de fecha 30 de octubre de dos mil veinte.

La apelante requirió información concerniente a: “ 1) copia de la grabación de google meet que registra la sesión del Consejo Superior Universitario, que fue celebrada el día 23 de julio de 2020, 2) copia de la grabación de google meet que registra la sesión del Consejo Superior Universitario, que fue celebrada el día 03 de septiembre de 2020, 3) Copia de la grabación de google meet que registra la sesión del Consejo Superior Universitario, que fue celebrada el día 24 de septiembre de 2020, 4) copia de la grabación de google meet que registra la sesión del Consejo Superior Universitario, que fue celebrada el día 01 de octubre de 2020, 5) copia de la grabación de google meet que registra la sesión del Consejo Superior Universitario, que fue celebrada el día 15 de octubre de 2020, 6) Copia certificada de la nómina de consejeros que conformaron quórum en la sesión del Consejo Superior Universitario, que fue celebrada el día 1 de octubre de 2020, 7) Copia certificada de la nómina de consejeros que conformaron quórum en la sesión del Consejo Superior Universitario, que fue celebrada el día 15 de octubre de 2020”.

Al respecto, la oficial de información resolvió: “...1) Entréguese, la información proporcionada por la Secretaría General correspondiente a dos archivos digitales que contienen la nómina de consejeros/as de las sesiones del 1 al 15 de octubre de 2020; 2)

Declárase por no acreditado la inexistencia de la información correspondiente a los archivos digitales de sesiones del Consejo Superior Universitario mediante google meet”(Sic).

Por su parte, el apelante, manifestó su inconformidad ante dicha resolución, argumentando que el fundamento argüido en la resolución de referencia no es suficiente para denegar el acceso a la información solicitada, en cuanto a que el Secretario General de la UES declaró la inexistencia de las grabaciones de *Google Meet* de las sesiones del Consejo Superior Universitario, sin haber dado cumplimiento a los parámetros que establece el Art. 73 de la LAIP, ignorando - a su criterio- las diligencias de la oficial de información del ente obligado.

II. El Instituto admitió la apelación y designó a la Comisionada Claudia Liduvina Escobar Campos, de conformidad a lo establecido en el art. 87 de la Ley de Acceso a la Información (LAIP). En el mismo auto, en plena observancia y respeto al Derecho de Defensa y Audiencia que debe imperar en todo procedimiento administrativo, de conformidad con el Art. 88 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), se requirió a la UES para que rindiera su informe justificativo.

Durante la etapa de instrucción, se recibió el informe justificativo de ley en virtud de lo dispuesto en el artículo 88 de la LAIP, mediante el cual el titular del ente obligado, en lo medular, señala que se solicitó la información requerida por el apelante a la unidad competente, en este caso el Secretario General de la UES quien en su momento remitió dos archivos digitales correspondientes a las nóminas de 1 al 15 de octubre correspondiente al año 2020; sin embargo, la información correspondiente al archivo digital de las sesiones del Consejo Superior Universitario, manifestó que la información es inexistente, por que solo sirven de apoyo para la elaboración de las actas.

Finalmente, el representante legal del ente obligado se pronunció en el mismo informe sobre el ofrecimiento de medios probatorios, consistentes en: a) acta de inexistencia de fecha 10 de marzo de 2021, suscrita por Francisco Antonio Alarcón Sandoval, remitiendo certificación de inexistencia de la información a través de la bitácora de búsqueda documental y formulario para la búsqueda de documentos, suscritos por el coordinador del Sistema de Gestión Documental y Archivos de la UES, **xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx**; y, b)

Resolución de confirmación de inexistencia NUE 205-A-2020, referencia UAIP/RI/NUE 205-A-2020, de fecha 11 de marzo del presente año suscrita por Sofia Zamora Briones, Oficial de Información de la UES.

III. En la realización de la audiencia oral, previo a su inicio, el Rector de la Universidad de El Salvador delegó la representación del ente obligado al Secretario General, conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA); asimismo, se contó con la presencia de la parte apelante.

En la etapa probatoria, se expuso la prueba documental ofrecida por el ente obligado, tanto la ofrecida en el informe de defensa (detallada anteriormente), como la relacionada en el escrito remitido por la UES el 13 de abril de este año. Por su parte, el apelante manifestó que no ofrecería ningún elemento probatorio para ser incorporado al expediente, y, seguidamente, se pronunció con relación a la documentación ofrecida como prueba. En ese orden, el Pleno, posterior a deliberar, resolvió admitir como prueba documental: a) acta de inexistencia de fecha 10 de marzo de 2021, suscrita por Francisco Antonio Alarcón Sandoval, remitiendo certificación de inexistencia de la información a través de la bitácora de búsqueda documental y formulario para la búsqueda de documentos, suscritos por el coordinador del Sistema de Gestión Documental y Archivos de la UES, **xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx**; y, b) Resolución de confirmación de inexistencia NUE 205-A-2020, referencia UAIP/RI/NUE 205-A-2020, de fecha 11 de marzo del presente año suscrita por Sofia Zamora Briones, Oficial de Información de la UES; c) nota de acuerdo CSU 021-2013-2015 (V), suscrita por Ana Leticia Zavaleta de Amaya de fecha 30 de julio de 2015; d) nota de acuerdo CSU 010-2015-2017 (V), suscrita por Ana Leticia Zavaleta de Amaya de fecha 8 de febrero de 2016; e) nota de acuerdo CSU 005-2017-2019 (III-1), suscrita por Cristobal Hernán Ríos Benítez de fecha 30 de noviembre de 2017; f) nota de acuerdo CSU 049-2015-2017 (XIII-2), suscrita por Ana Leticia Zavaleta de Amaya de fecha 2 de diciembre de 2016; g) nota de acuerdo CSU 002-2017-2019-E(VII-5.1), suscrita por Cristobal Hernán Ríos Benítez de fecha 20 de junio de 2018; h) nota de acuerdo CSU 002-2017-2019-E(VII-5.2), suscrita por Cristobal Hernán Ríos Benítez de fecha 20 de junio de 2018; i) nota de acuerdo CSU 051-2015-2017 (VII-2), suscrita por Ana Leticia Zavaleta de Amaya de fecha 20 de enero de 2017.

En la etapa de alegatos iniciales, el apelante manifestó en lo medular, que según lo manifestado por el Secretario General en la resolución emitida por la Oficial de Información de la UES, se evidencia que las grabaciones existen pero que solo sirven de apoyo para la elaboración de las actas; en ese sentido, argumenta el apelante que una grabación inexistente no puede servir para la elaboración de una acta, siendo que dicha actuación contraviene lo regulado en el Art. 73 de la LAIP, que establece como presupuesto para la declaratoria de inexistencia, que la información solicitada no se encuentre materialmente en la unidad administrativa, asimismo, manifiesta que la información objeto de dicho procedimiento es de carácter pública como lo señala el Art. 6 de la LAIP, siendo el caso que el ente obligado ha inobservado el principio de máxima publicidad en relación a lo establecido en los Arts. 26 del Reglamento Interior del Consejo Superior Universitario y 14 de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador; por tanto, no se acredita que el Consejo Superior Universitario ha tomado algún acuerdo para declarar privadas las sesiones de dicho órgano de gobierno, por tanto tiene la obligación de hacerlas públicas, y esto puede conseguirse a través de las grabaciones de Google Meet o a través de otra alternativa tecnológica.

Por otra parte, el Secretario General y representante del ente obligado, Licenciado Francisco Antonio Alarcón Sandoval, manifestó en lo medular en la fase de alegatos que primeramente nunca se ha negado la información solicitada al apelante, argumentando que el Consejo Superior Universitario tiene un sistema de grabación de las sesiones cuando estas son de carácter presencial el cual es un sistema antiguo y no tiene la capacidad de almacenar la cantidad de información que se genera en una grabación de sesión, en cuya participación intervienen mucho miembros e invitados, tomándose entre un aproximado de ochenta acuerdos; por tanto, mediante acuerdo CSU 021-2013-2015 (V), de fecha 30 de julio de 2015, se estableció que las grabaciones del Consejo Superior Universitario se utilizan para la elaboración de dichas actas y los acuerdos del CSU, luego son borradas, siendo estas como una fuente para elaborar la información; por otra parte argumenta que en virtud de la pandemia por COVID-19, se inició el trabajo de las sesiones a través de la Plataforma Google Meet, teniendo el problema que el sistema propio de la UES no es de última generación y que la conexión para las sesiones oscila alrededor de sesenta personas, se presentaban problemas técnicos en cuanto a la conectividad, ya que dicha plataforma no soportaba la cantidad de personas enlazadas, por ello se optó por no grabarlas, y se están elaborando los acuerdos y

actas de forma inmediata, por tanto las grabaciones solicitadas por el apelante no existen, aclarando que no existe ninguna mala intención u ocultamiento en entregar la información.

Posteriormente, el apelante en sus alegatos finales solicitó a este Instituto que se investigue con respecto a la información solicitada, pues a su criterio, ha sido generada y posteriormente borrada, como lo expresó el Secretario General, así como se ventile el hecho que no puede permitirse la violación al derecho de acceso a la información pública, en cuanto a que dichas sesiones son públicas y garantizarse el acceso a la misma con los detalles de sus deliberaciones.

Por su parte, la representación del ente obligado ratificó que las sesiones del Consejo Superior Universitario son públicas, y cuando en algún momento se ha declarado como privada alguna sesión, se ha procedido en cuanto a la legislación universitaria lo establece, aclarando que en este momento las sesiones realizadas bajo la plataforma Google Meet, se tiene la restricción de participación hasta una capacidad limitada de usuarios, por tanto las grabaciones son inexistentes, no se tienen, y de las que se grabaron sirvieron para elaborar las respectivas actas y acuerdos en su momento, pero que se tiene la información generada disponible como lo son las actas, a través del portal de transparencia.

En la fase de preguntas, el Comisionado Andrés Grégori consultó al representante de la UES respecto a cuántas sesiones del Consejo Superior Universitario a través de la plataforma Google Meet se tienen resguardadas o hasta que fecha tienen guardada la UES los Google Meet, respondiendo que lo que se grabó al inicio de la pandemia fueron algunas grabaciones de las sesiones, pero como se manifestó anteriormente, tuvieron problemas en cuanto a la estabilidad de la plataforma y se tenían algunas interrupciones de los participantes a la sesión, los cual cargaba el sistema y por ello se acordó no grabarlas.

Análisis del caso:

Previo a iniciar el presente análisis del caso, este Instituto tiene a bien indicar que el acceso a la información pública es un derecho constitucional implícito, el cual no se encuentra regulado expresamente en la Constitución (Cn); sin embargo, tiene su condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión, regulado en el Art. 6 de la Cn. Asimismo, este derecho comprende la facultad de buscar, recibir y

difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada que tengan “*interés público*”.

En consecuencia, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** naturaleza de la información solicitada; **(II)** supuestos de inexistencia de la información; **(III)** análisis de admisibilidad de la prueba; y, **(IV)** aplicación al presente caso.

I. Sobre la naturaleza de la información solicitada es importante mencionar que la misma es de carácter público oficiosa, la cual se encuentra establecida en el Art. 10 numeral 25 de la LAIP, debiendo estar disponible sin necesidad que los ciudadanos la soliciten, de conformidad a lo establecido en el Art. 6 letra “d” de la LAIP. Asimismo, el Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario establece en su artículo 39 que las sesiones de dicho consejo son de carácter público, por regla general, siendo dicha normativa interna de la UES la que garantiza, en principio, la publicidad de las sesiones que instala dicho consejo.

Por otra parte, el artículo 24 del referido reglamento establece que Secretario del Consejo, es quien tiene a su cargo la tramitación de los asuntos cuyo conocimiento corresponde a dicho organismo, así como su obligación primordialmente a recabar toda información y dictámenes que fueren necesarios para resolver. Además, como parte de los deberes que tiene durante el desarrollo de las sesiones, en la letra “d” del mismo artículo refiere que está el redactar las actas de las sesiones y firmarlas con el Rector cuando hubieren sido aprobadas. De esta forma, se delimitan las funciones y competencias que tiene dicho servidor en dicho organismo.

II. Ahora bien, con relación al objeto de controversia del presente procedimiento, la Universidad de El Salvador ha manifestado que toda la información requerida por el apelante es inexistente, ya que las grabaciones sólo se utilizan de apoyo para elaborar las actas de las sesiones del Consejo Superior Universitario.

En ese sentido, es importante mencionar que de conformidad a lo establecido en el Art. 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, cuando la información no se encuentre en los archivos de la Unidad Administrativa correspondiente, el oficial de información

tomará las medidas pertinentes para localizarla y en su caso de no encontrarla, expedirá una resolución que confirme su inexistencia.

Por otra parte, debemos mencionar que la inexistencia implica que la información no se encuentra en los archivos de la autoridad, tratándose de una cuestión de hecho. Asimismo, este Instituto ha reconocido como causales que pueden dar lugar a la inexistencia de la información, las siguientes: *a) nunca se haya generado el documento respectivo; b) el documento se encuentre en los archivos del ente obligado pero, se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; y, c) la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción, en este caso deberá verificarse si esta se realizó de conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria.*

Asimismo, este Instituto, ha emitido resoluciones con base a los criterios de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), y en relación a la inexistencia de la información ha establecido que: *“se deberá comprobar y motivar que la información solicitada no existe, y para ello, se tiene que acreditar que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos materiales y digitales, según corresponda; consignando los requisitos que den certeza de que la búsqueda fue realizada de manera minuciosa, tales como: i) que se hizo llegar la solicitud de acceso a todas las áreas competentes que pudieran contar con la información requerida, con el propósito de que, en su caso la localizaran y manifestaran si se encontraba disponible; ii) que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que estas fueron las adecuadas para atender el caso concreto; iii) que el criterio de búsqueda utilizado fue el adecuado: amplio y extensivo (es decir, no restrictivo); iv) que de la búsqueda efectuada no se localizaron documentos o información que den cuenta de lo solicitado; y, v) la precisión, en su caso de que se procedió a la destrucción de la información por cuestiones de la vida útil, en los términos de la ley de que se trate. Cuando posterior al análisis de la inexistencia de la información, se determine que la misma debería de existir en virtud de que deriva del ejercicio de facultades, competencias o atribuciones de la autoridad (ente obligado) ésta deberá generarse o reponerse en los casos que sea posible”.*

III. Para el presente caso, en el informe de ley presentado por la UES, se ofreció como prueba documental la nota de fecha 10 de marzo de 2021, suscrita por Francisco Antonio Alarcón, en la cual remite certificación de bitácora de inexistencia de la información, así como el formulario para la búsqueda de documentos, elaborados y suscritos por **xxxxxx xxxxxx xxxxxx**, quien es coordinador del Sistema de Gestión Documental y Archivo de ese mismo ente, donde se indica que, la información solicitada es inexistente, y se ha verificado que no se cuenta dentro de los registros, la información requerida.

Asimismo, se cuenta con la prueba consistente en: i) nota de acuerdo CSU 021-2013-2015 (V), suscrita por Ana Leticia Zavaleta de Amaya de fecha 30 de julio de 2015; ii) nota de acuerdo CSU 010-2015-2017 (V), suscrita por Ana Leticia Zavaleta de Amaya de fecha 8 de febrero de 2016; iii) nota de acuerdo CSU 005-2017-2019 (III-1), suscrita por Cristobal Hernán Ríos Benítez de fecha 30 de noviembre de 2017; iv) nota de acuerdo CSU 049-2015-2017 (XIII-2), suscrita por Ana Leticia Zavaleta de Amaya de fecha 2 de diciembre de 2016; v) nota de acuerdo CSU 002-2017-2019-E(VII-5.1), suscrita por Cristobal Hernán Ríos Benítez de fecha 20 de junio de 2018; vi) nota de acuerdo CSU 002-2017-2019-E(VII-5.2), suscrita por Cristobal Hernán Ríos Benítez de fecha 20 de junio de 2018; vii) nota de acuerdo CSU 051-2015-2017 (VII-2), suscrita por Ana Leticia Zavaleta de Amaya de fecha 20 de enero de 2017.

En este sentido, las pruebas aportadas deben instruir los hechos en disputa y proveer de conocimiento a este Instituto, para que administre con mayor acierto la justicia y emita un pronunciamiento apegado a la ley y a los hechos probados.

El principio de contradicción de la prueba, según el artículo 4 y 312 del CPCM, indica que las partes en un proceso, tienen el derecho de aportar pruebas, en igualdad de condiciones, utilizando los medios que posibiliten comprobar los hechos alegados. Esto significa, el aporte de pruebas idóneas y pertinentes para justificar sus argumentos; estas deben revestirse de las formalidades y requisitos establecidos en leyes respectivas. En ese contexto, el Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), de aplicación supletoria en el presente procedimiento conforme al artículo 102 de la LAIP, contempla dos extremos que

deben cumplirse para la admisión de la prueba presentada por las partes: la pertinencia y la utilidad.

En cuanto a la pertinencia, el artículo 318 del CPCM, establece que no debe admitirse ninguna prueba que no guarde relación con el objeto del proceso; por otro lado, en lo relativo a la utilidad, el artículo 319 del mismo cuerpo normativo, contempla que no deberá admitirse aquella prueba que, según las reglas y criterios razonables, no sea idónea o resulte superflua para comprobar los hechos controvertidos.

Dicho lo anterior, dado que la documentación tiene relación con la información solicitada en el presente caso, ya que versan sobre la búsqueda de la información solicitada, este Instituto considera admitir dicha prueba en su totalidad, por considerarla pertinente con base a las disposiciones citadas anteriormente.

IV. Ahora bien, en cuanto a la prueba para justificar cualquier negativa al acceso a la información, este Instituto ya ha establecido que debe recaer en el órgano al cual la información fue solicitada, pues con ello se alcanza un mayor grado de seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues al estar la misma en control del Estado, debe evitarse al máximo el actuar discrecional de este, al momento de establecer las restricciones.

En ese sentido, con la prueba aportada por el ente obligado, se ha demostrado que la UES sí realizó las diligencias de búsqueda en la Secretaría General de la Universidad de El Salvador, con el apoyo de la Unidad de Gestión Documental y Archivo, de forma amplia y exhaustiva, sobre los requerimientos de información en comento, documentando debidamente lo actuado para que la oficial de información emitiera en su momento la declaratoria de inexistencia con los elementos de motivación suficientes, debido a que en ningún momento se generó la grabación de dicha sesiones.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que tal y como lo expuso en la audiencia oral el representante de la UES, así como se evidencia mediante los acuerdos de dicho organismo, remitidos como elementos probatorios de este procedimiento, queda documentado que los audios que graba la Secretaría General son un apoyo para el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, la UES logró demostrar que en virtud de la pandemia por COVID-19, se inició el trabajo de las sesiones del Consejo Directivo a través de la Plataforma Google Meet, teniendo el problema que el sistema propio de la UES no es de última generación y que la conexión para las sesiones oscila alrededor de sesenta personas, por tal motivo, presentaban problemas técnicos en cuanto a la conectividad, ya que dicha plataforma no soportaba la cantidad de personas enlazadas, por ello se optó por no grabarlas y elaborar los acuerdos y actas de forma inmediata.

Por tanto, este Instituto estima que la UES realizó todas la diligencias pertinentes de búsqueda para localizar la información, derivando como resultado la declaratoria de inexistencia de dicha información por parte de la unidad correspondiente, tal y como se tiene por acreditada la inexistencia relacionada a las copias de las grabaciones de Google Meet del Consejo Superior Universitario, por nunca haber sido generadas.

De esta manera, ha quedado acreditado que las grabaciones solicitadas por el apelante no existen, debido a que la información nunca fue generada y no existe una obligación legal de hacerlo. Por tanto, conforme a los argumentos expuestos en la presente resolución, resulta procedente confirmar la resolución emitida por la oficial de información de la UES.

Por último, es pertinente orientar a la Universidad de El Salvador, para que puedan hacer uso de las herramientas tecnológicas apropiadas, para mejorar las condiciones de comunicación y gestión de la información generada en el desarrollo de las sesiones de dicho organismo.

Decisión del caso.

Por lo tanto, de conformidad con las razones antes expuestas, y con base en las disposiciones legales citadas y en los Arts. 2, 6, 18 y 85 y 86 de la Cn., y 94, 96 letra d y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve:**

a) Confirmar la resolución emitida el 30 de octubre de 2020, por la oficial de información de la **Universidad de El Salvador (UES)**, bajo la referencia UAIP/CR41-COVID-19/2020.

b) Hacer saber a las partes que contra este acto no cabe recurso en sede administrativa de conformidad a lo establecido en el Art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, si así lo considerase necesario.

c) Transferir al archivo el presente expediente una vez adquiriera estado de firmeza.

Notifíquese.-

-----A.GREGORI-----R.GÓMEZ-----ILEGIBLE -----
**PRONUNCIADA POR LOS COMISIONADOS Y LA COMISIONADA QUE LA
SUSCRIBEN.**

JF/JH